

Los dilemas del plan de recuperación: corregir o no corregir

Author : 15 y Último

El pasado 20 de noviembre se cumplieron 90 días del Plan de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad. Se supone que dichos 90 días eran de evaluación y prueba, siendo que el gobierno tenía un [“plan B”](#) y guardaba un [“factor de corrección”](#), por si no resultaba el plan A.

Ya este 27 de noviembre se cumplirá una semana de dicho lapso, y más allá de algunos rumores, no sabemos nada de ningún factor de corrección y menos de planes B. Puede que todavía esté evaluando. Pero puede también que el gobierno está satisfecho con la marcha del plan A. El tema es que tampoco ha ofrecido ningún balance que de elementos para contagiarnos de dicho optimismo. **Y si tomamos como referencia el termómetro popular, pocas pistas indican que las cosas estén mejor que antes del 20 de agosto.**

Algunos elementos, dan a pensar que sí: por ejemplo, **ahora se consigue más efectivo que antes. Y puede que haya más abastecimiento de ciertos productos.**

Pero con respecto a lo primero, también es verdad que la velocidad de los precios está haciendo que muchos billetes de baja denominación queden rápidamente en desuso –por no hablar de las monedas- lo que pone presión sobre los de mayor denominación al ser más demandados. Esto tal vez obligue al gobierno a soltar más billetes (recordemos que se aseguró contar con [“diez veces más de los necesarios”](#)). Ahora, como el mismo gobierno se comprometió a reducir la liquidez y la emisión de dinero “inorgánico”, es probable que no los suelte por no querer alimentar el espiral hiperespeculativo. También es bastante poco probable que aumente el cono, pues esto equivaldría a decir que el plan hiperinflacionario fracasó en tiempo récord.

Pero los resultados inmediatos de estas "no-medidas" saltan a la vista y no son menores: **si no emite billetes nuevos, la sobredemanda de billetes de mayor denominación los hará escasear, lo que incentivará su acumulación y la reaparición del mercado negro de los mismos. Síntomas de esto ya se observan: la venta a precios diferenciados de productos si se paga vía electrónica o efectivo (más baratos si es bajo esta última modalidad), ha vuelto a aparecer, no para ser llevados a Colombia (ya el contrabando no se justifica pues el diferencial de precios se invirtió: *los productos son ahora aquí más caros que en Colombia*), sino para ser revendidos a aquellos que no los consiguen.**

En cuanto a lo de “mejor” abastecimiento el problema también es obvio: no se trata de que esté aumentando la producción o la disponibilidad en anaquel, sino que se ha profundizado la tendencia iniciada en el último trimestre de 2016 ([luego del tristemente célebre PAC](#)), cuando la escasez de anaquel se trasladó a los hogares. Y es que dados los precios, no hay una mejora de la oferta sino un violenta contracción de la demanda. Es resumen, no es que

haya más productos, es que hay cada vez menos gente con capacidad adquisitiva, lo que crea el espejismo perverso de que el abastecimiento ha mejorado.

Ahora, si todo está bajo control y saliendo según lo planeado, entonces es necesario que se explique los motivos para estar optimistas, una explicación que, desde luego, debe venir acompañada de indicadores que la respalden.

Ahora bien, en efecto, puede que las cosas estén saliendo según lo planeado. Solo que se trata de un planeado no explícitamente enunciado. Nos explicamos:

Como ya se ha señalado, **una lectura no maniquea del plan de agosto, rápidamente advierte que, en su diseño, se hicieron convivir medidas y objetivos contradictorios, en el sentido que para aplicarse uno deben sacrificarse otros. Es decir: no pueden aplicarse y cumplirse unos y otros al mismo tiempo porque chocan entre sí.**

Para ir de lo más a lo menos obvio, ese es el caso de la estabilización de precio con liberalización cambiaria y devaluación: si se hace lo segundo, no puede esperarse que lo primero se alcance y menos en un contexto hiperinflacionario. **Tampoco puede pretenderse que en un contexto hiperinflacionario 50 precios se mantengan (los famosos 50 del plan de precios acordados, que por lo demás nunca llegaron a esa cantidad), al tiempo que se deja que todos los demás precios de la economía –incluyendo los tipos de cambio oficiales y paralelos- se muevan hacia arriba con absoluta impunidad.**

Lo mismo aplica para el caso de los precios de los bienes y servicios privados y aquellos que son públicos: no puede pedírsele a los primeros se mantengan si **el gobierno mismo viene ajustando tarifas y subiendo precios exponencialmente (caso de las [tarifas del servicio de aseo urbano, ajustadas en más de 10.000%](#), o las autorizaciones para el aumento del pasaje en más de 400% menos de dos meses).**

En un principio, desde el punto de vista propagandístico, la convivencia de metas y objetivos contradictorios puede mantenerse en el papel, pero en la medida en que tengan que aplicarse en la práctica temprano o tarde se debe escoger entre unos y otros, siendo que escoger significa asumir los costos implicados en dicha elección. Y es aquí donde el gobierno se encuentra en un verdadero dilema:

Por un lado, sabe que la hiperinflación se ha comido los salarios reconvertidos de agosto. Así como que el anclaje del bolívar soberano al petro ya no tiene efecto ni siquiera simbólico. Y desde luego, que todo eso genera un enorme malestar y un efecto *boomerang* de frustración dadas las expectativas positivas que logró acumular al principio de las medidas, lo que en condiciones normales ya es un problema, pero en las actuales, y dados los escenarios políticos que se avecinan (elecciones de diciembre, contexto conspirativo en torno al 10 de enero, etc.), es peligroso por decir lo menos.

Pero, por otra parte, el corazón de la política económica no explícita del gobierno implica sacrificar el poder adquisitivo en nombre de la estabilidad macroeconómica, pues en la medida en que se convenció en que la hiperinflación es un fenómeno monetario causado por el exceso de liquidez monetaria, tal y como dicen los monetaristas, al luchar por reducirla o al menos no aumentarla no solo está impedido de aumentar salarios e incluso de controlar precios, sino que en la práctica debe dejar que el poder adquisitivo se deprima aún más y los precios sigan aumentando.

Parece un contrasentido pero en realidad tiene mucha lógica. **Lo que genera confusión es que eso va en contra de lo que el gobierno discursivamente defiende.**

Pero eso es justo lo que queremos decir: que mientras el gobierno tiene una política económica manifiesta o discursiva que mal que bien coincide con los principios del chavismo (justicia social, igualdad, inclusión, etc.), en la práctica, tiene una política económica no bien explicitada que marcha en camino contrario. Y pareciera haber llegado el momento que debe escoger entre las dos.

Y puede, de por sí, que ya lo haya hecho: por eso **no ha aumentado el salario [como se rumoró la semana pasada](#). Pero por eso tampoco ha dado más bonos de ningún tipo a través del carnet de la patria, acható las tablas salariales de la administración pública, libera poco a poco las tarifas de los servicios y no hace nada porque se respeten los acuerdos de precios al punto de que esta política ya quedó olímpicamente en el olvido.**

A todas estas, lo que resulta realmente llamativo es que no puede decirse a tenor de lo que se vive en las calles y padece en los mostradores a la hora de pagar, que esta política convencional anti-inflacionaria esté funcionando. Y no lo está haciendo por una razón muy simple: porque como diagnóstico, [la hipótesis monetarista según la cual los precios suben porque sube la liquidez monetaria está errada para el caso venezolano](#). Y la demostración de ello es lo ocurrido a lo largo del año pero especialmente luego del 20 de agosto.

Y es que en si bien es verdad que la liquidez monetaria aumentó, lo hizo fue en términos nominales, en especial dada la inyección de efectivo que hizo pasar su porcentaje de participación dentro de la masa monetaria de un mínimo histórico de menos de un 1% entre julio y agosto a alrededor de 10% a estas fechas de noviembre. El índice de monetización de la economía, esto es, *la relación entre la cantidad de dinero en circulación y el nivel de actividad económica dado el tamaño del PIB, se ha contraído en más de un 60% de agosto a la fecha.*

Según esta cuenta, la hiperinflación debería estar ralentizándose. No hay indicadores oficiales que permitan decir si sí o si no. Pero la realidad de los bolsillos indica que ese está muy lejos de ser el caso. Según los índices de precios que publica la Asamblea Nacional en desacato –que no cuentan con ninguna validez oficial- la inflación de octubre fue menor a la de agosto y septiembre. Pero es un efecto normal de la fuerte subida ocurrida tras la reconversión.

[Como pronosticamos en nuestro anterior editorial](#), tras el fin de los subsidios a las nóminas de los privados, más la disparada del tipo de cambio paralelo, el efecto temporada decembrina (noviembre y diciembre son los meses históricamente inflacionarios por excelencia) y las expectativas políticas de lo que se viene a principio de año, lo esperable es que la hiperinflación siga su marcha independiente o no de que el gobierno quiera drenar la liquidez, como en efecto ha venido pasando.

Ahora, ¿qué pasa si el gobierno tiene razón y su hipótesis monetarista es acertada? En principio, habría que decir que desde el punto de vista econométrico no la tiene. Pero no obstante, **de seguir en su política en algún momento efectivamente derrotará a la hiperinflación, pero lo hará porque el costo de la precarización salarial, la pérdida del poder adquisitivo y la paralización de la actividad económica serán tales, que literalmente ya no habrá capacidad de pagar los precios.**

Y es probable entonces que pasemos de un escenario hiperinflacionario a otros deflacionario cuyas consecuencias pueden ser todavía más devastadoras. Esto puede sonar catastrofista, pero eso es exactamente lo que pasó en [Zimbabue](#) y es lo que el FMI acaba de reconocer como mea culpa que sus políticas de austeridad causaron en Grecia.

En este último caso, en el informe del economista Jefe del FMI Olivier Blanchard denominado *Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers* (Errores en la previsión de crecimiento y multiplicadores fiscales), [publicado recientemente](#) se afirma lo siguiente: *“Hemos encontrado que los realizadores de pronósticos subestimaron significativamente el incremento en el desempleo, la caída en el consumo privado y la inversión asociados a la consolidación fiscal”*.

Para el caso analizado, el de las medidas para “rescatar” a Grecia aplicadas por la troika (FMI, Unión Europea y Banco Central Europeo) con el colaboracionismo del gobierno “socialista” de Tsipras, esto se traduce en que el efecto multiplicador de la reducción del gasto público que se subestimó en 0,5 en realidad era cercano a 3, por lo que [cada reducción del primero lo que hizo fue ahondar más la recesión y disminuir las capacidades de ingreso, ahorro y gasto tanto de los ciudadanos como del Estado](#).

Para decirlo en criollo y aplicado al caso venezolano, esto significa que si tenemos un déficit fiscal entre 15 y 20 por ciento del PIB, al buscar reducirlo a “cero” esto puede tener un impacto de paralización aún mayor de la actividad económica de entre 30 y 30 por ciento. Si asumimos que desde 2013 a la fecha la economía se ha contraído cerca de un 50% (lo que nos coloca de nuevo en los niveles de 1998 pero con la población y las necesidades de 2018). Es difícil imaginarse un escenario más dramático, por decirlo de alguna manera.

Pero bueno, tal vez estamos solo especulando y el gobierno nos tiene reservado un buen factor de corrección: amanecerá y veremos.

